



NUE 284-A-2019 (GG)

Santos Hernández contra Municipalidad de San Pedro Masahuat

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

1. Descripción del caso:

A. Cristian Alexander Santos Hernández (en adelante “el apelante” o “el recurrente”) apeló ante este Instituto en contra de la resolución de referencia 06/2019, emitida el once de noviembre de dos mil diecinueve, por la Oficial de Información de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** (en adelante “la municipalidad” o “ente obligado”), que denegó la información correspondiente a los años 2018 y 2019, según detalle:

- 1. Programa de proyectos, montos ejecutados y tiempos de ejecución.*
- 2. Programa anual de compras.*
- 3. Proyectos ejecutados en el año 2018: carpetas técnicas, bases de licitación, actas de acuerdo municipal del proceso de selección, bitácora del proyecto, orden de inicio, contrato de ejecución, estimación y liquidación del proyecto con memoria de cálculo, orden de cambio (adenda si existen), actividad de control de calidad, resultado de pruebas y estudios realizados en la ejecución del proyecto, fotografía del rótulo del proyecto, publicación del periódico y comprasal de aviso y adjudicación.*
- 4. Sitio donde se encuentra la información oficiosa, según el Art. 10 de la LAIP.*

Al respecto, señaló que la Oficial de Información de dicho ente resolvió que su solicitud cumplía con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de la LAIP y Art. 54 literal d) del RELAIP, pero que no se le entrega la información en virtud de que la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional (UACI) no emitió respuesta a lo requerido.



Por su parte, el recurrente manifestó su inconformidad, y en ese sentido, solicita que el IAIP le resuelva dicho problema y así poder obtener la información a la brevedad posible.

B. El Instituto admitió la apelación y designó al entonces Comisionado **José Alirio Cornejo Najarro** como instructor del presente procedimiento. No obstante, como hecho notorio de su fallecimiento, el caso fue reasignado al Comisionado en funciones **Gerardo José Guerrero Larín**, a efecto de dar continuidad al presente procedimiento.

El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP fue rendido por Nelson Omar Cubías, en su calidad de Alcalde de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** y por José Armando Osorio García, en su calidad de Jefe UACI. En dicho informe manifestaron que necesitaban más tiempo para poder digitalizar la información y poder entregarla en el formato solicitado.

C. La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, únicamente con la comparecencia del apoderado de la municipalidad, licenciado **José Amilcar Vaquerano López**.

En la etapa de incidentes, el apoderado del ente obligado solicitó que este Instituto conceda un plazo para poder entregar la información, el cual propone que sea de la siguiente manera: entregar la información solicitada correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil dieciocho, para el día lunes dieciséis de noviembre del año en curso, y, la información correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil diecinueve, para el lunes catorce de diciembre de este año. Lo anterior, en razón que dicha municipalidad no cuenta con el recurso humano y tecnológico suficiente para poder digitalizar la información, según lo expuesto. En ese orden, el Pleno – luego de deliberar – resolvió sin lugar la solicitud planteada por la municipalidad, expresando los motivos de su decisión.

Acto seguido, el licenciado Vaquerano López interpuso un segundo incidente por falta de legítimo contradictor, puesto que la solicitud de información que se interpuso ante la oficial de información de dicha municipalidad fue suscrita por **CRISTIAN ALEXANDER SANTOS**, pero el recurso de apelación fue presentado por **CRISTIAN ALEXANDER SANTOS HERNÁNDEZ**, por lo que de conformidad al artículo doscientos sesenta y tres ordinal segundo, solicitó que se declare sin lugar el presente recurso, por haber sido

interpuesto por persona no legitimada para ello. El Pleno, luego de deliberar, declaró sin lugar su petición, expresando los motivos de su decisión.

Luego, en la etapa de ofrecimiento de prueba, el ente obligado manifestó que no incorporaría elementos al expediente para ser valorados. Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en donde la representación de la Municipalidad ratificó los argumentos expuestos en el informe y en la etapa de incidentes, en el sentido que tienen la disposición de entregar la información solicitada, pero que no había sido posible hasta este momento por no contar con el personal y recursos tecnológicos suficientes.

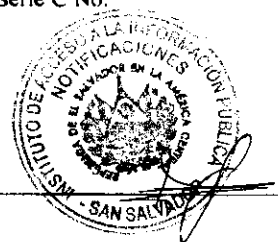
D. Posteriormente, el 28 de octubre del año 2020, la oficial de información de dicha Municipalidad remitió el memorándum suscrito por el Jefe UACI José Armando Osorio García, en donde exponen que remitirán a este Instituto la información solicitada por el apelante, de manera parcial, pues inicialmente remitirán la correspondiente al año 2018, siendo un total de 50 Ampos, numerados del 2 al 50. Posteriormente remitirán la del año 2019.

2. Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Principio de máxima publicidad y sus efectos; (II) Análisis del caso en concreto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que

¹ Corte IDH., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte IDH., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.



establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y

² CJI/RES. 147 (LXXIII O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI/RES_147_LXXIII/O/08.p

³ Corte I.D.H.- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

privados preponderantes, incluida la privacidad”, que “**las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información**”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Para el caso en comento, el ente obligado no entregó la información solicitada, en un primer momento, debido a que la Unidad Administrativa correspondiente no la remitió oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha municipalidad. Posterior a la audiencia oral, remitieron un total de 48 ampos, enumerados del 2 al 50. Los últimos archivos fueron recibidos en fecha 13 de noviembre del presente año.

El Art. 6 de la LAIP, define como **información pública** aquella información en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fecha de elaboración y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada, o conservada por estos a cualquier título.

Por otro lado, el mismo artículo 6 define la **información pública oficiosa** como aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta Ley, sin necesidad de solicitud directa. Este tipo de información siempre debe estar a disposición del público, debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Por ello, el Art. 10 de la LAIP establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente y poner a disposición y conocimiento de los ciudadanos.

En tal sentido, de conformidad con el Art. 10 ordinal 19 de la LAIP, las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme constituyen información pública oficiosa. En ese orden, dado que la información objeto de este procedimiento de apelación

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp



se encuentra relacionada a una orden de compra, debe entenderse que los datos solicitados no están sujetos, en principio, a ningún tipo de restricción.

Entonces, a criterio de este Instituto, la información solicitada por el apelante Santos Hernández es información de carácter público, y en su mayoría, de carácter pública oficiosa de conformidad al art. 10 de la LAIP, lo que significa que esta debe estar disponible para el público sin necesidad de que medie resolución de información para que las personas puedan acceder a ella; esto es, por medio de su respectivo Portal de Transparencia.

En consecuencia, la información solicitada debe ser entregada a la brevedad de manera íntegra al apelante, salvo que alguno de esos documentos consigne en su contenido datos personales de terceros, tales como: números de DUI, NIT, cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, entre otros datos personales que puedan constar en dicha documentación y sean susceptibles de ser protegidos; en cuyo caso la información deberá ser entregada en versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

Ahora bien, con relación a la información que ha sido enviada por el ente obligado correspondiente al año 2018, no puede tenerse por evacuado este requerimiento en su totalidad en tanto el ente obligado no ha remitido el acta de entrega de la información, en donde conste que el recurrente ha recibido a satisfacción la misma, por lo que, en este acto se ordenará la remisión de dicho documento, así como también se ordenará que la información que aún se encuentran digitalizando no sea remitida a este Instituto, sino que se la entreguen directamente al apelante, debiendo remitir a esta entidad únicamente la o las actas de entrega de información y recepción por parte de **Cristian Alexander Santos Hernández**.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE**:

a) **Modificar** la resolución 06/2019, emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** el 11 de noviembre de 2019, que denegó el acceso

a la siguiente información: i) *Programa de proyectos, montos ejecutados y tiempos de ejecución*; ii) *Programa anual de compras*; iii) *Proyectos ejecutados en el año 2018: carpetas técnicas, bases de licitación, actas de acuerdo municipal del proceso de selección, bitácora del proyecto, orden de inicio, contrato de ejecución, estimación y liquidación del proyecto con memoria de cálculo, orden de cambio (adenda si existen), actividad de control de calidad, resultado de pruebas y estudios realizados en la ejecución del proyecto, fotografía del rótulo del proyecto, publicación del periódico y comprasal de aviso y adjudicación*; iv) *Sitio donde se encuentra la información oficiosa, según el Art. 10 de la LAIP*; por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** que, dentro del plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue – a través de su oficial de información – al ciudadano **Cristian Alexander Santos Hernández**, la siguiente información: i) *Programa de proyectos, montos ejecutados y tiempos de ejecución*; ii) *Programa anual de compras*; iii) *Proyectos ejecutados en el año 2018: carpetas técnicas, bases de licitación, actas de acuerdo municipal del proceso de selección, bitácora del proyecto, orden de inicio, contrato de ejecución, estimación y liquidación del proyecto con memoria de cálculo, orden de cambio (adenda si existen), actividad de control de calidad, resultado de pruebas y estudios realizados en la ejecución del proyecto, fotografía del rótulo del proyecto, publicación del periódico y comprasal de aviso y adjudicación*; iv) *Sitio donde se encuentra la información oficiosa, según el Art. 10 de la LAIP*; por ser información de naturaleza eminentemente pública. Lo anterior, correspondiente a los años 2018 y 2019. Dicha información deberá ser entregada de acuerdo a la modalidad de entrega indicada por el ciudadano en su solicitud de información y de forma íntegra, salvo que alguno de esos documentos consigne en su contenido datos personales, en cuyo caso deberá entregarse una versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

c) **Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra “b” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada

al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe deberá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede, pues con esta resolución queda agotada la vía administrativa de conformidad al Art. 131 de la LPA, quedando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

g) Publíquese esta resolución oportunamente.


Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

